



CONSTITUYENTE

¿El Estado tiene recursos suficientes para que se cumpla la futura Constitución?

PÁGINA 4-5



CONFLICTOS

El conflicto persiste, pero hay menos casos con otros actores, métodos y demandas.

PÁGINAS 2-3



JÓVENES

Los jóvenes apuestan por la unidad y piden participar en el desarrollo del país.

PÁGINAS 8-9

JUBILEO

Junio-julio 2007

No. 8

La Paz - Bolivia



**El desarrollo de Bolivia:
desafíos y oportunidades**

Aportes para construir el país desde la Constituyente

La conflictividad persiste en el país, pero hay menos casos y nuevos actores, métodos y demandas



La lista de conflictos en el país, de los últimos 20 años, es interminable. Sólo durante el primer trimestre del 2007 se registraron 46 conflictos por mes. En comparación con la gestión 2005, esta cifra se redujo a la tercera parte, según un reporte del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales.

Durante la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005), en 20 meses de gestión, se suscribieron 218 convenios, "cumpliendo 564 puntos contenidos e incumpliendo 1.810 puntos", revela un estudio del 2006 de la agencia de Cooperación Alemana GTZ-PADEP, en una nota de la Revista Domingo de La Prensa.

Desde antes y ahora, los conflictos tienen la misma evolución. Sectores o grupos plantean una demanda; el pedido no es escuchado; los demandantes ejercen medidas de presión como marchas, paros o bloqueos; se desatan enfrentamientos y a veces represión violenta; se agudiza el conflicto; se inicia la negociación con rencores entre las partes y se firma un convenio que es fruto de la presión y con pocas posibilidades de ser cumplido.

Como los puntos acordados no han sido cumplidos por la debilidad del Estado de atender la demanda social, el ciclo se reinicia después de algún tiempo.

Esta es otra de las cadenas sin fin del país. Hay una lógica del conflicto y un largo pliego de peticiones todavía sin solución, a

pesar de más de dos décadas de reformas económicas teniendo como resultado un cuadro social en el que dos terceras partes de la población son pobres.

Tipos de demandas

Las demandas son distintas. Algunas son por necesidades como acceso a empleo, tierras, educación, salud, vivienda o caminos.

Otras son estructurales, reclaman la redistribución de la riqueza, como el aprovechamiento de los recursos naturales, pero también por espacios políticos, como la inclusión en la toma de decisiones.

También hay conflictos recurrentes, aquellos referidos a los convenios incumplidos o demandas que por descuido se desatan siendo prevenibles. En ese caso, las autoridades se convierten en otros generadores del conflicto.

Los actores

Los actores de los conflictos han estado marcados por épocas, periodos y coyunturas.

Mientras fue importante la economía estatista, el sector más influyente fue el minero. Su liderazgo se destacó por la formación política y por la contundencia de sus medidas. A esto se debe que aún hoy la Central Obrera Boliviana, por tradición, siga bajo el mando de los mineros.

En los años neoliberales, a partir de 1985, los mineros fueron desplazados por la relocalización, pero muchos de sus dirigentes fueron los gestores de un nuevo movimiento, el de los cocaleros, que confluye con el resurgimiento del movimiento indígena campesino.

Poco después surgieron demandas por los recursos naturales. Con la *Guerra del Agua*, el año 2000, comenzó una nueva época.

La participación ciudadana se empieza

a fortalecer desde las juntas de vecinos, aunque inicialmente surgen con demandas muy concretas y restringidas a su ámbito de representación.

En este periodo vuelven a tener protagonismo los mediadores y facilitadores del diálogo. La Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos son permanentemente requeridos para acercar a las partes.

Con el último cambio de gobierno, en enero de 2006, el país inició otro periodo. La actual administración se inscribe en una economía social de mercado y otra tendencia promueve el nacionalismo indígena.

Los que ahora protestan son los movimientos cívicos, algunos prefectos contrarios a la línea gubernamental y otros actores regionales. Y muchos de los que antes protestaban ahora están en la responsabilidad de tomar decisiones.

Compañero contra compañero

Otro elemento distintivo de los últimos años es el conflicto desatado entre compañeros del mismo sector.

Los mineros cooperativistas se han hecho enemigos de los mineros de la empresa estatal. Tienen en su haber la muerte de 16 trabajadores por los enfrentamientos en el cerro Posokoni, a bala y dinamita.

Los maestros urbanos y rurales están divididos y no logran acordar una estrategia común para plantear demandas similares.

Los campesinos, también alineados a movimientos políticos principalmente de izquierda, tienen dirigencias paralelas.

Y en el último tiempo han emergido algunas otras confrontaciones, varias de ellas artificiales. Los papeños contra

los sucrenses, los chaqueños contra los tarijeños, sectores del oriente contra el occidente, ciudadanos contra rurales.

En la mayoría de los casos, se impone el interés sectorial, regional o corporativo, antes que los objetivos nacionales.

Lo que ahora está en disputa no sólo es una redistribución de tierras o espacios de inclusión política. La pelea es también por el renta, por los ingresos que obtiene el Estado principalmente por la explotación de hidrocarburos, lo que ha desatado una actitud rentista en varios sectores que exigen la mejor tajada en beneficio propio.

Estos últimos recursos son temporales, sujetos al comportamiento de precios internacionales.

Los métodos

Con el transcurrir del tiempo, los métodos también han cambiado. La huelga de hambre, aunque todavía aparece en la agenda, está desgastada.

En los años de inicio del neoliberalismo, la autocrucifixión fue una de las acciones más duras de protesta que provocaba consternación, pero ahora tampoco sensibiliza.

Luego vinieron los bloqueos de caminos y actualmente emergen los

cabildos como la manifestación de presión y demanda.

En el cambio de formas, también han habido casos de toma de rehenes, como una de las expresiones más violentas.

Por su lado, las respuestas de los gobernantes han tenido distintos matices. Después de las dictaduras militares, la matanza más grave ocurrió en el ocaso del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El uso de francotiradores en la *Guerra del Agua* y en la *Guerra del Gas* ha sido una de las opciones más extremas.

Lo que desapareció, no obstante a ser una medida constitucional, fueron los estados de sitio. El último que lo utilizó fue el general Hugo Banzer, en abril del 2000, pero su medida no duró ni una semana. Posteriormente, ni Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y tampoco Evo Morales apelaron a este recurso en momentos de tensión.

Efectos y manejo del conflicto

Los conflictos están presentes y son continuos en todas las sociedades, pero lo importante es evitar que se provoquen heridas incurables.

Muchas movilizaciones permitieron a los sectores mejorar su situación y su

propósito de inclusión, justicia y equidad; pero otros tienden a generar divisiones, resentimientos y mayor conflictividad; sin embargo, no en el grado de guerra civil o de cualquier otra expresión de violencia extrema.

Actualmente, el país está confrontado y ante el riesgo de abrir heridas de difícil reencuentro por temas de interés de clase, etnia o región. Ningún conflicto, por más justa que sea la demanda, justifica muertes, heridos y menos acciones de venganza.

El otro elemento es el planteamiento y manejo del conflicto, lo que demanda responsabilidad de las partes, para plantear pliegos realistas, lo que implica considerar las posibilidades del Estado.

También es importante que las autoridades no se comprometan a realizar lo que no podrán cumplir, porque, a futuro, se desgasta la credibilidad en el diálogo y la negociación.

Otro factor es el interés político, tanto del lado de los demandantes como de las autoridades, pues muchos conflictos han estado impregnados de cálculos sectoriales o partidarios.

Por último, la participación y el seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos es otro factor para evitar el resurgimiento de conflictos.



¿Cuántos recursos tiene el Estado y qué será posible financiar para que se cumpla la futura Constitución?

Antes de generar expectativas y frustraciones, el país tiene la tarea de meter las manos al bolsillo para ver cuántos recursos tiene y qué realmente podrá financiar después de que se defina la nueva Constitución Política del Estado.

En la situación actual, la distribución de recursos públicos presenta desequilibrios que no permiten generar las condiciones para un crecimiento sostenido y equitativo del país. La Asamblea Constituyente debe ser el escenario en el que se discuta la conveniencia de redistribuir los recursos del Estado, principalmente provenientes de hidrocarburos y minería, que permitan mejorar las condiciones para el desarrollo nacional.

Ante las expectativas generadas por el proceso de cambio, en previsión a que se generen frustraciones que desaten mayor conflictividad, la reforma de la Constitución también debe considerar qué es lo que el país efectivamente puede proyectar, puesto que, para cumplir lo que se defina, dependerá de cuántos recursos disponga para su implementación.

Distribución de recursos

La actual distribución de recursos públicos presenta problemas que podrían incidir en el cumplimiento de algunas determinaciones a ser asumidas en la nueva Constitución Política del Estado.

El recurrente déficit y consecuente endeudamiento que presiona cada vez más sobre los ingresos del gobierno nacional podría afectar, a futuro, al financiamiento para sectores como educación, salud, defensa, policía y otros.

Si bien en el último tiempo el Sector Público y el país en su conjunto han sido favorecidos con muchos más recursos que en el pasado, como consecuencia de

los precios internacionales de materias primas y de la aplicación de la nueva Ley de Hidrocarburos, la distribución de estos recursos ha favorecido principalmente a prefecturas y municipalidades y no ha permitido solucionar el problema del déficit del gobierno nacional.

Una parte de las obligaciones que afronta actualmente el Gobierno Nacional está siendo financiada con deuda interna y con deuda externa comercial, ambas que, a diferencia del endeudamiento externo del pasado, no serán condonadas.

Por otro lado, la actual Constitución establece la igualdad como uno de sus valores superiores y la justicia social como principio de la organización económica; sin embargo, la distribución de los recursos, principalmente por la aplicación de la nueva Ley de Hidrocarburos, provoca grandes diferencias entre las regiones que afectaría a un desarrollo equitativo.

Debido a la actual distribución de regalías por hidrocarburos, minería y forestales, la diferencia entre lo que recibe un departamento y otro, por habitante, llega a ser hasta más de 300 veces. (Ver Gráfico)

Consistencia de las propuestas

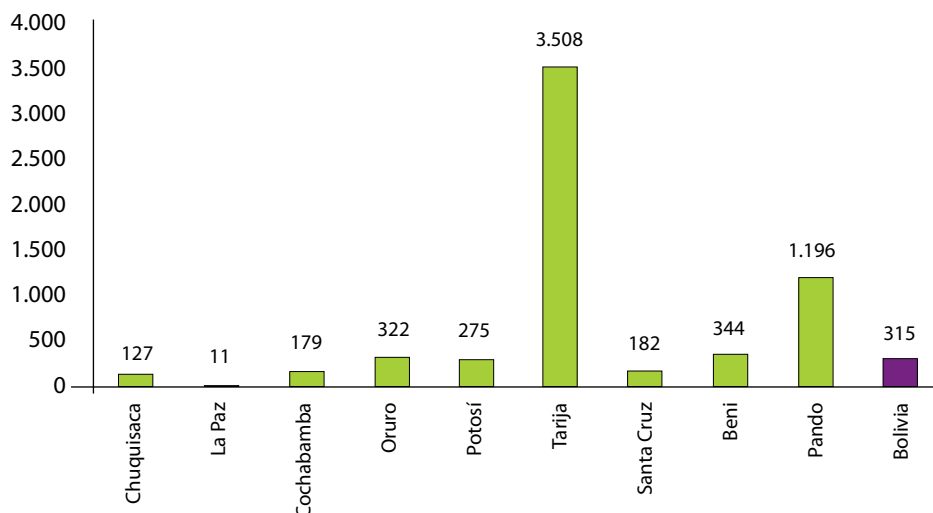
La nueva Constitución pretende ser el marco legal que posibilite mejorar las condiciones de la población en todos los aspectos, pero las definiciones a ser tomadas pueden ser excluyentes, considerando la limitación de recursos públicos.

Si bien, la educación, salud, vivienda y alimentación son básicos para una vida digna, a momento de comprometer recursos del Estado, se deben tomar en cuenta las verdaderas posibilidades de financiamiento.

Por ejemplo, si se establece que la educación es un derecho y que el Estado tiene la obligación de sostenerla y garantizarla, habrá que analizar si, con la actual distribución, los recursos que le quedan al gobierno nacional podrán financiar una educación de calidad para todos. En la hipótesis de que las regiones se hagan cargo de la educación, habría que considerar si todas las regiones están en posibilidades de financiar este servicio.

De igual manera, si se ratifica la igualdad como uno de los principios

**Distribución de regalías por prefectura 2007
por persona, con base en el Censo 2001
(en Bolivianos)**



fundamentales de la nueva Constitución Política del Estado, y al mismo tiempo se pretende otorgar a las regiones la potestad de disponer de sus recursos, se deberá considerar que algunas regiones tendrán mucho más recursos públicos que otras, y que esto incidirá en diferencias en los niveles de inversión pública, servicios básicos, desarrollo y oportunidades.

Por otro lado, se deberá evaluar si en el caso de no tener un sistema impositivo único, en el que todas las regiones tengan los mismos impuestos, será posible contar con un Fondo de Compensación para las regiones menos favorecidas, de modo que permita reducir las desigualdades.

Asimismo, a momento de determinar los niveles de gobierno subnacionales que se determinen y la cantidad de órganos de gobierno en cada nivel, se tendrá que considerar los costos que esto implica y los efectos que tendría un incremento del gasto burocrático en desmedro de la inversión o de gastos sociales.

Para el debate

La Asamblea Constituyente debe ser el escenario apropiado para tratar una nueva distribución de los recursos públicos, para corregir los desequilibrios, tanto con relación al déficit del gobierno nacional que puede afectar al cumplimiento de sus obligaciones, como con relación a la inequidad entre regiones.

Si bien la distribución y asignación de recursos públicos puede variar en el tiempo de acuerdo a las circunstancias y necesidades, por lo que normalmente se la establece mediante leyes, en la Constitución se podrían determinar los lineamientos generales para la distribución de los recursos principalmente provenientes de la explotación de recursos naturales, que actualmente ha sido definida de acuerdo a la presión.

De esta manera, en el futuro, cuando se encuentren o decidan explotar nuevos de recursos naturales, la distribución sería automática y no conforme a la presión y los conflictos sociales.



Reunión de asambleístas con la población de Tupiza, en encuentros territoriales.

Por otro lado, las determinaciones de la Asamblea Constituyente deberían considerar las limitaciones de recursos públicos, que deben constituirse en un marco de referencia que permita evaluar las verdaderas posibilidades de financiamiento y cumplimiento de las propuestas.

Corresponde, por tanto, realizar un análisis de los recursos con los que cuenta el Estado, las obligaciones que se tienen, las posibilidades de financiar los diferentes bienes y servicios públicos y, por último, la distribución de recursos asociado a competencias, según las instancias más efectivas para llevarlas a cabo.

El considerar inicialmente la asignación de recursos asociado a competencias y seguidamente la distribución a los niveles de gobierno que se harían cargo, podría permitir que esta distribución pueda ser realizada al margen de presiones políticas, a diferencia del pasado, lo que también daría más

garantías para el cumplimiento de atención de las necesidades y demandas de la población.

Hasta hoy, diferentes actores como universidades y prefecturas, entre otros, presentaron propuestas y ejercieron presiones para que sean consideradas en la nueva Constitución; sin embargo, si se aceptan todas las demandas sin tomar en cuenta que por la limitación de recursos algunas pueden ser excluyentes, una vez aprobada la nueva Constitución, se corre el riesgo de que, en lugar de reducir, aumenten las presiones y los conflictos.

Al contrario, la Constitución Política y la distribución de recursos debería ser realizada considerando al ciudadano común que necesita educación, salud, infraestructura para su región, servicios básicos, seguridad, etc. Y la priorización debería ser realizada tomando en cuenta todos los aspectos, al margen de la presión de los diferentes actores que sólo representan a una parte del todo.



El país aún es pobre, con mayoría de gente joven y con oportunidades para el desarrollo

Casi la mitad de la población en Bolivia pasa hambre. Seis de cada 10 habitantes son pobres y de ellos cuatro viven en extrema pobreza. Al otro lado de la moneda se registran incremento en los ingresos del país, cuentas bancarias de prefecturas y municipios sin gastar, más circulante de dinero, más exportaciones y otras cifras macroeconómicas favorables que han repercutido, incluso, en el incremento de precios de la canasta básica familiar.

La Asamblea Constituyente tiene la tarea de marcar el rumbo para lograr mayor equidad, con redistribución justa de las riquezas entre poblaciones y regiones, y con iguales oportunidades para sus habitantes.

La situación de pobreza, pero también las oportunidades para proyectar el desarrollo, recaen sobre una población mayoritariamente joven. El 60% de los habitantes tiene menos de 24 años de edad, según el Censo 2001 y sus proyecciones.

Por otro lado, la mayoría de la población tiene raíces indígenas y la mayoría de ellos son pobres; de modo que el rostro de la pobreza en Bolivia tiene rasgos indígenas y de gente joven.

El país también tiene oportunidades que pueden convertirse en crecimiento económico, aprovechando las condiciones actuales y reorientando los esfuerzos para

fortalecer el sector productivo. Si por el proceso de cambio se logra cosechar los frutos, muchos jóvenes de hoy deberían estar en pocos años ocupados en los nuevos puestos de empleo estable, principalmente en tareas productivas y algunas de servicio, con mejores capacidades, educación y salud, en medio de una democracia participativa y plural.

La pobreza como desafío

Los ingresos del Estado por hidrocarburos y minería se han cuadruplicado, pero no alcanzan para reducir la pobreza y menos para lograr el nivel esperado para el 2015. La población del 93% de los municipios está en extrema pobreza, en un porcentaje superior al 30%.

Para que el Estado pueda cumplir con la obligación de atender a la población requiere contar con ingresos, y una forma de captar recursos es a través de los impuestos. El padrón de contribuyentes es sólo el 10 por ciento de la población ocupada; a esto se suma la poca conciencia tributaria con un alto número de evasores. Además, el número de trabajadores del sector informal llega aproximadamente al 60%.

El 93% del total de las recaudaciones se concentra en tres departamentos, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Por este cuadro de situación, se debe poner énfasis en ampliar la base tributaria y lograr

que el sistema de impuestos sea más equitativo, acompañado de la generación de una cultura ciudadana para mejorar las contribuciones, para que esos recursos sean destinados al desarrollo humano.

El 24% de los niños menores de tres años tiene desnutrición crónica, lo que les impide crecer adecuadamente y les provoca dificultades en el aprendizaje.

Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esa cifra debe bajar a 19% hasta el 2015; sin embargo, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Bení y Pando están actualmente por encima del 30%.

En el caso de los niños indígenas, la tasa de desnutrición llega a 28%, debido principalmente al consumo insuficiente e inadecuado de alimentos, lo que perjudica el desarrollo físico y mental durante los dos primeros años de vida.

Este cuadro obliga al país a realizar intervenciones masivas orientadas a la seguridad alimentaria, garantizando la salud materna, lo que también implica fortalecer el potencial agrícola en todos los departamentos, para producir alimentos suficientes, nutritivos y de bajo costo.

De cada mil nacidos vivos, 54 niños bolivianos mueren antes de cumplir el primer año, y 75 antes de cumplir los primeros cinco años de edad; la mayoría de ellos a causa de infecciones respiratorias y diarreas que pueden ser prevenidas.

Analizando la población respecto a su condición étnico lingüística, casi el doble de niños indígenas respecto de los no indígenas fallecen antes de cumplir un año.

Para el 2015, la meta es bajar a 30 muertes por mil niños nacidos vivos. Los departamentos que están en condiciones de cumplir este objetivo son Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz.

Con relación a la atención de partos, sólo la mitad de las mujeres indígenas son atendidas por personal calificado; en cambio, las mujeres no indígenas pasaron la meta fijada para el 2015, puesto que el 80% son atendidas por personal médico.

Existe una buena posibilidad de que todos los departamentos cumplan esta meta fijada si amplían los sistemas de seguro público gratuito, poniendo énfasis en el control prenatal y aumentando aspectos interculturales en los sistemas de salud.

Oportunidades y recursos

Bolivia tiene desafíos, pero también nuevos recursos y oportunidades. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años se ha incrementado logrando tasas mayores al 4%, aunque esta cifra es insuficiente para lograr las metas económicas o sociales trazadas, ya que el crecimiento del país debería ser al menos de 7% cada año.

La mayor actividad, cerca del 70%, se concentra en el eje central: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La condición de país exportador de materias primas todavía no ha cambiado, por el contrario, hay una especialización histórica en cada región. Más de la mitad del valor de las exportaciones corresponden a productos básicos; como el gas de Tarija, los minerales de Potosí y la soya de Santa Cruz.

Si se cambia el sentido exportador en una relación de productividad y competitividad de productos manufacturados, con valor agregado, se ratificaría el sentido de que los departamentos que tienen una orientación hacia el mercado externo son capaces de tener mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto.

Por la relación entre la inversión pública y el crecimiento económico se establece que el sector productivo ha sido descuidado y se ha priorizado la inversión en infraestructura y en sectores sociales.

Casi la mitad de la inversión pública se financia con recursos de fuente externa y los subsidios a los hidrocarburos benefician sólo a algunos departamentos y, en mayor grado, a sectores no pobres.

En consecuencia, se debe buscar una mejor orientación productiva de las regiones del área occidental,

principalmente en madera, textiles, joyería y ganadería camélida; en los valles, cueros, uvas, vinos, singani y textiles; y en el llano, ganadería vacuna, agroindustria y madera, pero, además, diversificar la manufactura y apostar por el turismo.

Las características migratorias demuestran que cinco departamentos son expulsores: Potosí, Oruro, Beni, Chuquisaca y La Paz, tanto hacia otras regiones del territorio como hacia otros países.

El departamento más grande en extensión, Santa Cruz, tiene una densidad de siete habitantes por km² y, al igual que Cochabamba, son receptores de la migración interna que tiene como consecuencia el incremento de la población en zonas de pobreza urbana.

A pesar de la pobreza, también hay potencialidades para atender a los sectores que requieren empleo productivo para aportar al crecimiento.

Una de las rutas para aprovechar las oportunidades es el uso eficiente de los recursos, con un esfuerzo nacional para reducir la pobreza, considerando que los sectores más postergados están presentes en todas las regiones del territorio.

El desafío común es que se alcancen condiciones dignas de vida y desarrollo en todos los departamentos del país.

Bolivia: Estadísticas e indicadores económicos, sociales y demográficos

Variable	Unidad de medida	Periodo de referencia	Beni	Pando	Chuquisaca	Cochabamba	La Paz	Oruro	Potosí	Santa Cruz	Tarija	Bolivia	Condición étnico lingüística	
													No indígena	Indígena
Población (1)	Habitantes	2006	414.758	69.541	611.659	1.709.803	2.672.793	437.131	772.578	2.467.440	471.563	9.627.266	3.229.239	1.674.922
Producto Interno Bruto	En millones de Bs	2006	2.722,2	765,6	3.989,2	14.379,3	21.474,9	4.276,9	4.427,9	25.863,8	11.528,6	89.428,3		
Exportaciones	En millones de \$us	2006	64,7	9,9	93,9	375,8	304,8	350,2	557,8	997,5	1.325,3	4.079,9		
Recaudación de impuestos	En millones de Bs	2006	66,7	5,1	165,1	896,2	3.441,8	114,2	140,3	3.916,5	160,8	8.906,6		
Tasa de culminación de octavo de primaria	En porcentaje	2005	72,5	55,3	55,8	74,6	88,3	88,3	64,0	81,1	69,1	77,8		
Pobreza extrema	En porcentaje	2001(2)	41,0	34,7	61,5	39,0	42,4	46,3	66,7	25,1	32,8	40,4	24,1	49,2
Desnutrición crónica de niños menores de tres años	En porcentaje	2003	30,3	30,3	32,7	24,3	25,8	33,2	38,8	12,3	16,7	24,2	15,7	27,8
Mortalidad infantil	Por mil nacidos vivos	2003	33		67	61	52	88	72	39	29	54	33	62
Cobertura de parto institucional	En porcentaje	2005 (3)	66,8	61,7	64,3	60,6	53,1	70,3	51,5	67,1	62,1	61,9	82,7	51,8
Relación de alfabetas mujeres respecto de hombres entre 15 y 44 años	En porcentaje	2002	97,0	96,0	87,1	91,7	95,4	96,4	83,0	96,9	94,2	93,8	98,9	88,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE, INE, SNIS y SIE

(1): La población según criterio étnico lingüística se calcula sobre la base de datos del Censo 2001 y de la población mayor a 15 años

(2): La condición de pobreza extrema según criterio étnico lingüística corresponde a la gestión 2002

(3): La cobertura de parto institucional según criterio étnico lingüística corresponde a la gestión 2003

Jóvenes del Chaco apuestan por la unidad nacional la educación y participación para construir el país

Cuando los jóvenes del Chaco se pusieron frente al espejo de la realidad empezaron a describir las imágenes de la pobreza y el desempleo, pero en el horizonte dibujaron un país con esperanza, en la que ellos aparecen como constructores.

La unidad nacional, el acceso a educación con calidad y el reconocimiento para que puedan participar más activamente son algunas de sus propuestas para lograr un mejor país.

Estos aportes fueron expresados en tres encuentros realizados en Yacuiba, Camiri y Monteagudo. Los 120 líderes de 16 municipios pertenecen a la Red de Jóvenes del Chaco de los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.

Desde la reflexión de los jóvenes chaqueños y chaqueñas, la pobreza habita en sus casas y aunque sienten que sus padres los dejan al margen a la hora de tomar decisiones, creen tener la fortaleza para compartir no sólo las penas, sino también la búsqueda de soluciones.

“Cuando hay problemas en mi casa, mis papás se reúnen solitos, y cuando les preguntamos si mi hermano y yo podemos participar para ayudar en algo, nos hacen a un lado diciendo que somos inmaduros y que no sabemos nada; y peor yo, que soy mujer, sólo me mandan a la cocina”, relata Hilda, una joven camireña de 17 años.

¿Cómo aportar a la búsqueda de soluciones?, ¿los jóvenes que son la mayoría tienen algo que hacer o sólo deben esperar las respuestas de los mayores?

La juventud es crítica y precisa. Con sus palabras, describen la distribución inequitativa: Unos tienen todo, pero a muchos les falta para vivir.

Esto es atribuido a que hubo concentración del poder en pocas manos,



Un grupo de trabajo debate en el taller realizado en la población de Monteagudo, Chuquisaca.

además de corrupción, y eso quitó el pan de la boca a muchos sectores de la población, generando exclusión.

También describen la falta de oportunidades y el estado de la producción nacional que siente los efectos de la competencia internacional.

En especial en Yacuiba, ciudad que vive fundamentalmente del comercio en la frontera con Argentina, los jóvenes tienen la vivencia de cuán valorada o no es la producción nacional, hecho que, aseguran, va en desmedro de la industria del país, porque provoca desempleo.

“Un joven tiene menos probabilidades de conseguir un empleo digno. Cuando nos presentamos a alguna vacancia nos humillan y discriminan, y si nos contratan nos pagan míseros salarios por el hecho de ser jóvenes... Así no podemos costearnos nuestros estudios ni ayudar a nuestras familias”, dice Ariel, de 23 años, uno de los líderes más activos de la Red de Jóvenes del Chaco.

En los eventos, ponen en mesa el tema de la educación. Perciben que hay un nivel de instrucción y conocimientos para algunos y otro servicio de menor

calidad para otros estudiantes.

En la Bolivia que quieren construir, demandan intervenir como integrantes y participantes activos, y no como simples espectadores.

Muchos se sienten relegados por algunos adultos, a los que reclaman compromiso con el país. “No llevamos el país en hombros, sino sólo lo cargamos un rato mientras sirve a nuestros intereses”, reflexiona Verónica, nacida en Monteagudo, hace 18 años.

“Tenemos las pilas puestas” dicen en los encuentros, cuando toca la hora de pensar en las tareas, y así los jóvenes chaqueños disponen estratégicamente cada paso en el papel que quieren desarrollar hoy, para ser parte de la construcción de un país más fortalecido.

Concienciar tanto a los jóvenes como a los adultos para dejar a un lado los prejuicios y estigmas hacia ellos y ellas es una de sus propuestas.

También plantean capacitar y orientar a los jóvenes para formar a nuevos líderes que tengan como

características el compromiso, la ética y la responsabilidad.

Reclaman mayor participación en espacios de decisión, tanto familiar, pero también local y nacional, para hacer conocer su visión de país con ideas innovadoras en los ámbitos político, económico, social y cultural.

Se ofrecen como nuevos protagonistas para ejercer el control social, principalmente para enfrentar a la corrupción.

Los jóvenes subrayan que no quieren ser llamados sólo para actividades lúdicas o de distracción ni para animar campañas políticas en tiempos electorales.

Remarcan que la educación es un alimentador constante de sus capacidades y que es un elemento imprescindible en una mirada estratégica para el desarrollo nacional.

Como chaqueños y chaqueñas, señalan que la diversidad cultural es una riqueza del país y que hay que

eliminar la discriminación, exclusión y enfrentamientos. Por el contrario, la identidad es un valor y merece respeto.

La realidad de los jóvenes tiene características similares en todas las regiones del país, discriminados, estigmatizados y subestimados, pero también llenos de esperanza, sueños y capacidades inexploradas.

El rol que ellos mismos se proyectan es como promotores de la unidad del país, sin discriminación y con integración.

Si el país fuera una persona, ¿qué características tendría?

Las respuestas a estas preguntas empezaron a dibujar un país-persona que está fijo en perspectiva en la mente de los jóvenes del Chaco cruceño, tarijeño y chuquisaqueño:

- Bolivia es mujer joven de aproximadamente 25 años de edad. Es mujer porque es madre que cuida y vela por sus hijos "aunque mal paguen" dándoles lo que necesitan (diversidad de pisos ecológicos, recursos naturales... un maravilloso territorio). Es mujer por que es emprendedora y luchadora.
- Bolivia es una mujer joven y profesional con una múltiple especialización: es ama de casa, experta en leyes, agricultura, administración y arquitectura.



En Camiri, Santa Cruz, grafican a Bolivia.

- Bolivia es una mujer joven, rica en diversidad cultural y recursos naturales.

- Bolivia enfrenta sus debilidades: no hay diálogo entre sus hijos, enfrentamientos entre ellos e injusticias.

- Bolivia se siente fuerte porque siente amor por todos sus hijos, porque es trabajadora, productora, alegre y entusiasta.

- Bolivia es una mujer joven y profesional que reivindica y fortalece los valores: vida, libertad, justicia, honradez, unidad, perseverancia, respeto a la diversidad, solidaridad, igualdad, diálogo, armonía con la naturaleza, complementariedad y dignidad.



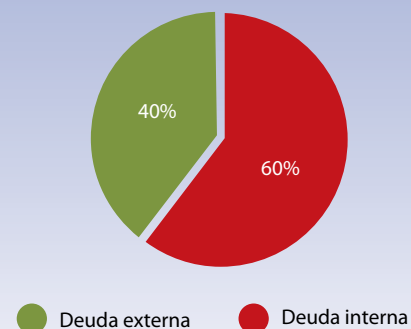
En Yacuiba, Tarija, el teatro foro enriqueció el debate.

Gracias

Evolución deuda externa e interna



Relación deuda externa y deuda interna
julio 2007



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia.

El endeudamiento responsable es otra tarea para definir en la Asamblea Constituyente

La deuda de Bolivia es una cadena sin fin que empezó a crecer de forma considerable desde hace casi cuatro décadas y, a pesar de que se benefició de reprogramaciones y condonaciones, se prevé un nuevo endeudamiento.

En la actual coyuntura, en la que se define un nuevo texto constitucional, resulta oportuno generar instrumentos que definan una gestión responsable de deuda, de manera que garanticen la sostenibilidad fiscal y la adopción de mecanismos de evaluación sobre el uso eficiente de los recursos.

La atención a este tema en la Asamblea Constituyente permitiría incorporar en la legislación los límites de endeudamiento y la auditoría de la deuda, para que los futuros créditos se destinen efectivamente a promover el crecimiento del país.

Evitar el sobreendeudamiento

Pese a que han mejorado los ingresos públicos, la proyección es que Bolivia seguirá dependiendo de la ayuda externa y en particular de futuros créditos. El gobierno prepara la propuesta para el próximo Grupo Consultivo con la cooperación internacional, para solicitar recursos destinados al Plan Nacional de Desarrollo; y también requerirá ayuda para paliar los efectos del fenómeno de El Niño.

Por los antecedentes y las proyecciones, Bolivia ha permanecido entre los países

más pobres, por lo que, durante la última década, fue escogida para acceder a reprogramaciones y condonaciones.

Como sus gastos fueron mayores que sus ingresos, ese déficit fiscal fue cubierto con contrataciones de deuda nueva, lo que explica que el país haya vuelto a niveles de sobreendeudamiento en gestiones pasadas.

A pesar de los alivios en los últimos 10 años, la deuda externa prácticamente se mantuvo entre 4.000 y 5.000 millones de dólares y en ese lapso de tiempo, el país pagó a sus acreedores un total de 3.100 millones por capital e intereses.

Después de los programas de condonación HIPC y del Banco Mundial, FMI y Banco Interamericano de Desarrollo, el saldo de la deuda externa llegó a julio de este año a 2.000 millones de dólares.

Se prevé que los próximos créditos tendrán otras condiciones y el país contratará préstamos más caros.

Por otro lado, mientras la deuda externa bajó por las condonaciones, la deuda interna crece cada día de manera silenciosa. En la última década, el saldo se cuadruplicó.

Las condiciones de estos préstamos tienen plazos más cortos y tasas de interés más altas en comparación al endeudamiento externo.

A julio de 2007, la deuda interna supera los 3.100 millones de dólares. En suma, el país debe a sus acreedores cerca de 5.160 millones de dólares, de los cuales 40% corresponde a deuda externa y 60% a deuda interna. (ver gráfico)

Sostenibilidad

El país requiere tener sus propios parámetros de evaluación del endeudamiento porque, según los indicadores de organismos internacionales, la deuda externa de Bolivia es sostenible; por lo tanto, podría continuar endeudándose, tanto con créditos blandos como con créditos comerciales, lo que supone pagar un mayor servicio de deuda.

Por otra parte, oficialmente, no existen indicadores para medir la sostenibilidad de la deuda interna de un país. Existen algunos estudios que indican que la deuda interna de Bolivia es sostenible en el corto plazo, pero no en el largo plazo.

Impacto de la deuda

La deuda externa fue contratada ante la necesidad de realizar proyectos de impacto, pero no existe una verificación sobre el alcance de sus resultados.

Algunos créditos financiaron proyectos que no beneficiaron al país, por un mal diseño o por poca factibilidad de ejecución, entre otras causas. Estudios sobre deuda señalan que se construyeron

elefantes blancos, como el Complejo de Karachipampa y la Fábrica de Aceites de Villamontes, que jamás pusieron en funcionamiento su capacidad instalada, los que, además, generaron un alto costo por el pago del servicio de deuda.

El estudio y análisis de estos casos no ha sido profundo debido a falta de información y por falta de mecanismos legales. Como esos casos, podrían haber otros similares.

Si bien hubo diversas denuncias de corrupción en la ejecución de recursos, también pueden existir proyectos que hayan cumplido con todas las normas de control gubernamental, pero que financiaron proyectos poco útiles, mal diseñados y con un reducido o nulo impacto de beneficio para la población.

Actualmente, no se evalúan estos impactos de forma regular y formal, por lo tanto, si existieran estos casos, no se ha establecido quiénes son los responsables, tanto interna como externamente.

Está en consideración que por cada 10 habitantes, seis son pobres, de los cuales cuatro son indigentes, nivel que prácticamente se ha mantenido así en los últimos años. Este indicador da una idea del impacto que ha tenido la inversión en el país y cuánta atención hubo sobre la pobreza.

Propuestas

Considerando el comportamiento de la deuda en el país y el beneficio que deben tener estos recursos para la población, en el espacio de la Asamblea Constituyente, se podrían analizar los siguientes temas:

- La elaboración periódica de auditorías de deuda promovidas y liderizadas por comités conformados por parlamentarios y sociedad civil, de manera que todos los créditos contratados a futuro estén sujetos a procesos de evaluación.
- La necesidad de contar con límites de endeudamiento, para evitar llegar nuevamente a altos niveles de deuda, para lo cual se deberán formular indicadores nacionales propios de deuda externa e interna.

Auditorías de deuda

¿Qué son las auditorías de deuda?

Son investigaciones y análisis sobre los procesos de endeudamiento externo de un país que, a diferencia de los procesos de control gubernamental que se enfocan principalmente en el cumplimiento de normas, analizan las condiciones en las que se generó el préstamo y la eficiencia y calidad del gasto.

Las principales variables a considerar en las auditorías serían el rol que jugaron los acreedores, las circunstancias de contratación, las disposiciones contractuales y el destino de los fondos.

¿Quiénes participan?

Pueden realizarse auditorías de deuda a partir de iniciativas de los parlamentarios, en su rol de fiscalizadores, y auditorías sociales, impulsadas por la población. Entre ambos, podrían conformar un comité nacional de auditoría de deuda.

La auditoría transparente, abierta a la participación y vigilancia ciudadanas, aporta a los resultados la confianza y legitimidad sobre el pago de la deuda, donde la ciudadanía ejerce su legítimo derecho de controlar los actos que comprometen su patrimonio social, cultural y natural, y el de las siguientes generaciones.

¿Qué deudas se revisan?

Se podrían revisar las deudas pasadas con una ley específica en ese sentido y, por mandato de la Constitución, se puede incluir la revisión periódica de deudas futuras.

Casos de otros países

Brasil, Argentina y Ecuador son algunos de los países de la región que realizaron auditorías de deuda y encontraron deudas ilegítimas, logrando la anulación de los pagos por esos créditos.

Límites de endeudamiento y sostenibilidad

¿Qué son los indicadores de deuda?

Son parámetros que miden el peso que tiene el saldo de la deuda y su pago, generalmente respecto de variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, ingresos fiscales y exportaciones.

¿Qué indicadores se usan?

Las instituciones financieras internacionales plantean parámetros de evaluación; sin embargo, normalmente se evalúa sólo la deuda externa. Cada organismo continúa planteando su propia metodología para medir a un país.

¿Qué enfoque debería tener?

Estos indicadores se enfocan solamente en la liquidez y solvencia del país para medir la sostenibilidad; sin embargo, se olvida el enfoque de desarrollo humano, es decir, el impacto de los créditos en beneficio de la población, el desarrollo y la reducción de la pobreza. Por lo tanto, también deberían plantearse otros indicadores que complementen el concepto de sostenibilidad de deuda.

El propósito de países HIPC

Algunos países HIPC están trabajando en la formulación de sus propios límites de endeudamiento externo e interno.



La vocación de la Iglesia en alianza con el Estado contribuye a prestar servicios con calidad humana

La hermana Rita Borjia entra sala por sala a verificar el estado de los pacientes que sobrevivieron al embarrancamiento de una flota en la ruta a Nor Yungas. También conversa con los familiares para comprometer el mayor esfuerzo del personal médico para paliar el dolor, pero sus palabras ya alivian la angustia en un hospital que tiene el prestigio de salvar vidas.

Desde hace muchos años, las misioneras de salud conviven con las penas, pero contribuyen con calor humano, como parte de los remedios.

En el ámbito de la educación, los hermanos de La Salle, en el poblado fronterizo de Puerto Rico, en Pando, se constituyen en la única opción para que los jóvenes de recursos limitados logren el bachillerato, con un buen nivel educativo y con una infraestructura adecuada.

Algunos fondos provienen de centros educativos de ciudades capitales, y así se aporta a una redistribución de recursos, en un país caracterizado por las brechas entre ricos y pobres.

Como estos casos hay centenares de experiencias en los rincones más alejados del país, donde la presencia de la Iglesia Católica expresa su vocación de servicio de manera cualitativa.

Muchas de estas tareas se respaldaron en convenios para que el Estado y la Iglesia lleguen a la gente, la protejan, la formen o la asistan, tanto en actividades cotidianas y permanentes como en tiempos de emergencia y solidaridad.

Esta es la dimensión que más allá de las reformas en la Constitución se debe



precautelar para no dejar desprotegidos a sectores de la sociedad boliviana que, frente a la ausencia del sector público, han encontrado puertas abiertas de escuelas, hospitales, hogares, centros de asistencia o de formación, proyectos de desarrollo especialmente en el área rural de instancias católicas.

Para que estos servicios sean sostenibles en el tiempo, no sólo de las obras sociales de la Iglesia sino de otras iniciativas particulares o confesionales, se requieren normas claras con el Estado para que se ofrezca una prestación de servicios con calidad humana y profesional.

En este propósito se anotan varias organizaciones no gubernamentales que, alejadas de móviles políticos, tienen el sano interés de contribuir.

Las alianzas y esfuerzos compartidos se constituyen en una fortaleza y en una oportunidad para llegar a la gente que más necesita.

Principalmente como efecto de

la Participación Popular, hay más infraestructura y mejor equipamiento en salud y educación. Cada vez son menos las escuelas con goteras, vidrios rotos y adobes en vez de pupitres.

Lo que aún es necesario mejorar es la calidad de los servicios, como por ejemplo en la atención cuando un paciente se pone en las manos de un médico o un alumno en la de su maestro, e inclusive lograr que el funcionario público se convierta en servidor con calidad y calidez, humanizando la gestión pública.

La tarea de la Iglesia Católica es una de las experiencias de mayor trayectoria y cuenta con recursos humanos calificados, con vocación y compromiso.

Estos esfuerzos institucionales que despliegan la Iglesia Católica y otras instituciones no gubernamentales no buscan reemplazar al Estado en la obligación de proteger a la población, sino más bien coadyuvar al cumplimiento de los derechos de todos los bolivianos.

Director Ejecutivo:

Juan Carlos Núñez

Responsable de edición:

Jorge Jiménez Jemio

jubileobolivia@yahoo.com

fundajub@entelnet.bo

www.jubileobolivia.org

Teléfonos: 2125177 - 2311074

Casilla 5870 La Paz, Bolivia

Equipo técnico:

Waldo Gómez

René Martínez

Patricia Miranda

Jaime Pérez

Wilson Gisbert

Herberth Irahola

Dirección: Edif. Esperanza,
Av. Mcal. Santa Cruz, Piso 2

Administración:

Miriam Clavijo

Gabriela Coyo

Distribución:

Isabel Jemio

Bladimir Herrera

*Publicación con apoyo de
KZE-Misereor Alemania
y Oxfam GB*

